

CONVENCION DE ASISTENCIA JUDICIAL
Y DE
RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL
ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
LA REPUBLICA ITALIANA

La República Argentina y la República Italiana;

Con el deseo de intensificar la cooperación entre ambos Estados en el campo de la asistencia judicial en materia civil, y

Teniendo en cuenta que ambos Estados están vinculados por las Convenciones de La Haya sobre procedimiento civil del 1 de marzo de 1954 sobre supresión de la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros del 5 de octubre de 1961 y sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial del 18 de marzo de 1970,

Han convenido lo siguiente:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

MABITO DE APLICACION

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a las materias objeto del Derecho Civil, incluyendo las materias objeto del Derecho Comercial, del Derecho de Familia y del Derecho Laboral.

ARTICULO 2

AUTORIDADES

1. A los fines de la presente Convención, se entenderá por autoridad judicial aquella autoridad de las Partes que fuera competente, según la legislación nacional, para entender en los procedimientos previstos en esta Convención.

2. A los fines de la presente Convención, la autoridad central será, para la República Argentina el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y para la República Italiana el Ministerio de Gracia y Justicia.

ARTICULO 3

PROTECCION JURIDICA

1. Los nacionales de cada una de las Partes gozarán en el territorio de la otra, en lo referente a su persona y sus bienes, de los mismos derechos y de la misma protección jurídica que los nacionales de esta última.

2. Los nacionales de cada una de las Partes tendrán acceso a las autoridades judiciales de la otra para la prosecución y la defensa de sus derechos e intereses en las mismas condiciones que los nacionales de esta última.

ARTICULO 4

DISPENSA DE LA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

1. A los nacionales domiciliados o residentes en el territorio de una de las Partes, que se presentaran como actores o intervinientes ante las autoridades judiciales de la otra, no se les podrá imponer por su calidad de extranjeros o de no residentes o de no domiciliados en el territorio de esta última, la "cautio judicatum solvi" respecto de los gastos de procedimiento.

2. Si el beneficiario de la "cautio judicatum solvi" resultara condenado con costas por sentencia firme emanada de autoridad judicial de una de las Partes, la sentencia será ejecutada, a instancia del legitimado, sin gastos, en el territorio de la otra Parte.

La solicitud y sus anexos se ajustarán a lo establecido en el artículo 23 de la presente Convención.

La autoridad judicial interviniente se limitará a certificar si fuera exigible la parte de la sentencia referida a los gastos.

ARTICULO 5

PATROCINIO GRATUITO Y EXENCION DE TASAS Y ANTICIPOS

1. Los nacionales de cada una de las Partes gozarán en el territorio de la otra de los beneficios del patrocinio gratuito en los procedimientos civil y contencioso administrativo, en la misma medida y condiciones que los nacionales de esta última.

2. Los nacionales de cada una de las Partes serán, asimismo, beneficiarios en el territorio de la otra, en la misma medida y condiciones que los nacionales de esta última, de la exención de tasas y anticipos por gastos de justicia y otros gastos de procedimiento, así como de las demás facilidades previstas en esta materia en la legislación de esta última Parte.

3. Las disposiciones de los párrafos anteriores se aplicarán a todo el proceso, comprendida la ejecución de sentencia.

"4. Las facilidades previstas en los párrafos precedentes, cuando dependieran de la situación personal o patrimonial del recurrente, serán acordadas sobre la base de certificaciones otorgadas por la autoridad competente de la Parte en cuyo territorio el solicitante tiene su residencia. Cuando no tenga residencia en ninguna de las Partes, dicha certificación será otorgada por las autoridades competentes de la Parte de

la cual sea nacional, de acuerdo con lo establecido en su legislación.

ARTICULO 6

VALIDEZ DE LOS ACTOS PUBLICOS

A los fines de la presente Convención los actos públicos de cada una de las Partes tendrán en la otra el valor probatorio de los actos correspondientes de esta última Parte.

ARTICULO 7

EXENCION DE LEGALIZACION

A los fines de la presente Convención los instrumentos, las copias y las traducciones redactadas o autenticadas por la autoridad competente de cada una de las Partes y provistas de la firma y sello oficial, estarán exentos de toda forma de legalización para ser utilizados ante la autoridad de la otra Parte, excepto lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención.

ARTICULO 8

INFORMACION EN MATERIA LEGAL

Cada una de las Partes transmitirá a la otra la información que ésta le solicitare -en el idioma de la Parte requerida- sobre sus leyes y reglamentos y sobre su jurisprudencia. Esta información será remitida sin traducción.

ARTICULO 9

REMISION DE PARTIDAS DE ESTADO CIVIL

Cada Parte, a requerimiento de la otra, remitirá copias de partidas y extractos de partidas de estado civil, así como otros documentos referentes al estado y a la capacidad de las personas necesarios para un

procedimiento judicial, si la legislación de la Parte requerida lo consintiera.

ARTICULO 10

SISTEMAS DE COMUNICACION

Las Partes canalizarán las comunicaciones y documentación a las que se refiere la presente Convención a través de sus autoridades centrales, excepto que disposiciones particulares de la presente Convención dispongan lo contrario.

ARTICULO 11

PERSONAS JURIDICAS

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán en cuanto fuera posible, a las personas jurídicas constituídas en cada una de las Partes de acuerdo con su respectiva legislación.

ARTICULO 12

DENEGACION DE ASISTENCIA, DEL RECONOCIMIENTO Y DE LA EJECUCION

La asistencia judicial, como así también el reconocimiento y la ejecución de los actos, de las sentencias y de las resoluciones previstos por la presente Convención podrán ser denegadas si fueran contrarias al orden público de la Partes requerida.

TITULO II

ASISTENCIA JUDICIAL

ARTICULO 13

OBLIGACION DE LA ASISTENCIA

Cada una de las Partes prestará a la otra, a su requerimiento,

asistencia para la ejecución de los actos y de los procedimientos judiciales, en particular los que se refieran a lastrasmisión y notificación de los actos, a la admisión de pruebas, pericias y declaraciones de las Partes y de testigos, así como a la producción y trasmisión de las pruebas materiales.

ARTICULO 14

COMISIONES ROGATORIAS

La solicitud de ejecución de la comisión rogatoria deberá indicar:

- a) la autoridad judicial requirente;
- b) la autoridad judicial requerida, si fuera posible;
- c) la identificación del proceso dentro del cual la comisión rogatoria fuera requerida;
- d) la identidad, el domicilio o lugar de residencia, la nacionalidad y la profesión de las partes y, eventualmente, de sus representantes;
- e) el objeto de la comisión rogatoria y los actos a diligenciar.

ARTICULO 15

DILIGENCIAMIENTO DE LAS COMISIONES ROGATORIAS

1. Las comisiones rogatorias serán diligenciadas en la forma prevista por la legislación de la Parte requerida. Si la Parte requirente solicitase una forma especial de tramitación, la Parte requerida deberá observar las modalidades indicadas, siempre que ello no contraríe su legislación.

2. Si los datos y elementos suministrados por la Parte requirente fueran insuficientes, a los fines de permitir a la Parte requerida el diligenciamiento de la comisión rogatoria, esta última, luego de efectuadas las comprobaciones del caso, requerirá a la otra Parte todos los datos y

elementos complementarios que considere necesarios.

3. La Parte requerida hará conocer en tiempo útil el lugar y la fecha del diligenciamiento de la comisión rogatoria. Las autoridades y las personas interesadas podrán asistir al diligenciamiento siempre que ello no contrariase la legislación de la Parte requerida.

4. Terminada la tramitación de la comisión rogatoria, la Parte requerida restituirá las actuaciones a la Parte requirente.

La comisión rogatoria deberá ser diligenciada en el más breve tiempo posible.

Cuando no hubiese sido posible dar cumplimiento a la comisión rogatoria, la Parte requerida restituirá en el más breve tiempo posible las actuaciones indicando los motivos que han impedido su diligenciamiento.

ARTICULO 16

DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LA NOTIFICACION DE LOS ACTOS

La prueba de la notificación surgirá del recibo firmado por la persona que hubiere recibido el documento, debidamente sellado, fechado y firmado por la autoridad que efectuó la notificación, o bien de la certificación de esta autoridad respecto del modo, lugar y fecha de la notificación. Si el acto a notificar constara en doble ejemplar, la prueba de la recepción o de su notificación podrá surgir de la inscripción de los datos antes mencionados en el ejemplar que se devolviere.

La Parte requerida remitirá sin demora a la otra el recibo o la certificación que compruebe la notificación.

ARTICULO 17

EJECUCION DE LAS COMISIONES ROGATORIAS POR MEDIO DE MISIONES DIPLOMATICAS O DE OFICINAS CONSULARES

Cada una de las Partes, a través de sus misiones diplomáticas o de

sus oficinas consulares acreditadas ante la otra, sin ejercer coacción, podrá notificar actos a sus nacionales que se encontraren en el territorio de esta última y, cuando no se opusiera la legislación de la otra Parte, a recibirles declaraciones.

ARTICULO 18

COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUIRENTE

1. Cuando una de las Partes cite a comparacer, en calidad de testigo o perito, ante su propia autoridad judicial, a una persona que residiera en el territorio de la otra Parte, ésta persona no podrá ser obligada a comparacer en virtud de dicha citación.

La Parte requerida procederá a la citación según le hubiera sido solicitado sin que pudieren surtir efecto las medidas conminatorias o las sanciones previstas en caso de incomparecencia.

2. Al testigo y al perito les corresponderá el reembolso de los gastos de viaje, los viáticos y las indemnizaciones previstas en la legislación de la Parte requirente. El pedido deberá especificar su importe.

ARTICULO 19

GASTOS

Quedarán a cargo de la Parte requerida los gastos derivados de la ejecución de la asistencia judicial, excepto los honorarios y los demás gastos relativos a la producción de pericias, y aquellos derivados del diligenciamiento de una comisión rogatoria que hubiera tenido que efectuarse en una forma especial solicitada por la Parte requirente, conforme lo previsto en el párrafo 1 del artículo 15 de la presente Convención.

ARTICULO 20

IDIOMAS

1. Las solicitudes de asistencia judicial, y los documentos correspondientes, serán redactados en el idioma de la Parte requirente y acompañados de una traducción efectuada por traductor público, en el idioma de la Parte requerida.

2. Los documentos relativos al diligenciamiento de la comisión rogatoria serán transmitidos a la Parte requirente en el idioma de la Parte requerida.

TITULO III

RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS Y DE OTRAS RESOLUCIONES

ARTICULO 21

OBLIGATORIEDAD DEL RECONOCIMIENTO Y DE LA EJECUCION

Cada una de las Partes reconocerá y declarará ejecutivas, dentro de los límites de los artículos siguientes, las sentencias en materia civil dictadas por autoridades judiciales de la otra, así como las disposiciones concernientes al resarcimiento de los daños y a la restitución de bienes contenidas en sentencias penales.

ARTICULO 22

CONDICIONES REQUERIDAS

1. Las sentencias pronunciadas en materia civil por la autoridad judicial de cada una de las Partes, así como las disposiciones concernientes al resarcimiento de daños y a la restitución de bienes contenidas en sentencias penales, serán reconocidas por la otra Parte salvo lo dispuesto en el artículo 12º de la presente Convención, conforme a las siguientes condiciones:

- a) que las sentencias hubieran sido pronunciadas por una autoridad judicial competente de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo;
- b) que la parte condenada hubiere sido debidamente citada según la ley de la Parte donde se dictara sentencia o que hubiere comparecido en juicio y, de conformidad a esa misma legislación, que hubiere sido debidamente representada;
- c) que la sentencia hubiera adquirido autoridad de cosa juzgada y fuera ejecutiva según la ley de la Parte donde hubiere sido dictada;
- d) que entre las mismas partes y sobre el mismo objeto no se hubiera dictado sentencia por parte de las autoridades judiciales de la Parte requerida;
- e) que no se hubiere iniciado un procedimiento entre las mismas partes y sobre el mismo objeto ante cualquier autoridad judicial de la Parte requerida, con anterioridad a la presentación de la demanda ante la autoridad judicial que hubiera pronunciado la resolución de la que se solicitase el reconocimiento.

2. A los fines del párrafo 1, inciso a), se considerará competente a la autoridad judicial cuando:

- a) a la fecha de la interposición de la demanda, el demandado hubiera tenido domicilio o residencia en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial hubiere dictado sentencia;
- b) el demandado hubiera sido citado a juicio por una controversia referida a una actividad de carácter industrial, agrícola comercial o financiera, por uno de sus establecimientos, una sucursal o una agencia, situados en el territorio de dicha Parte;
- c) por acuerdo expreso o tácito de los interesados, la obligación contractual objeto de la controversia hubiera sido o debiera haber sido ejecutada en el territorio de dicha Parte;
- d) en materia de responsabilidad extracontractual, el hecho del que ella

derivare se hubiera verificado en el territorio de dicha Parte;

- e) el demandado se hubiera sometido expresamente a la competencia de dicha autoridad judicial, siempre que la ley de la Parte requerida no se opusiere, ya sea mediante elección de domicilio, o mediante acuerdo relativo a la determinación de la autoridad competente;
- f) el demandado al contestar el mérito de la controversia no hubiere opuesto excepción de incompetencia;
- g) la controversia hubiera tenido como objeto un derecho real sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial hubiere pronunciado sentencia;
- h) la resolución tuviera por objeto el estado o la capacidad de una persona que, a la fecha de la interposición de la demanda, hubiere tenido la nacionalidad de la Parte cuya autoridad judicial pronunció la sentencia;
- i) la controversia tuviera por objeto una obligación de prestar alimentos y el actor fuere residente o estuviere domiciliado en la Parte cuya autoridad judicial pronunciara la sentencia.

3. Las resoluciones provisionalmente ejecutivas de cada una de las Partes, aunque susceptibles de recurso ordinario, serán reconocidas y declaradas ejecutivas en la otra Parte, según las condiciones previstas por el presente artículo, en cuanto fueren aplicables, si decisiones del mismo tipo pudieran también allí ser dictadas o ejecutadas.

ARTICULO 23

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO Y DE EJECUCION

1. La solicitud de reconocimiento y de ejecución de una resolución podrá ser presentada directamente por la persona interesada a la autoridad judicial competente de la Parte donde la sentencia deberá ser reconocida o ejecutada. En este caso, la documentación mencionada en el párrafo siguiente deberá estar acompañada de la apostilla prevista en el artículo 4º

de la Convención Suprimiendo la Legalización de los Documentos Públicos extranjeros y Anexo, adoptada en la ciudad de La Haya el 5 de octubre de 1961. Sin embargo, las Partes podrán suprimir la necesidad de dicha formalidad mediante un acuerdo administrativo.

2. La solicitud de reconocimiento o de ejecución de una resolución deberá estar acompañada de:

- a) una copia de la resolución certificada conforme al original;
- b) una certificación de la que resulte que la resolución tiene fuerza de cosa juzgada, en los casos en que no se encontrare expresamente mencionado en la resolución misma, o bien que ella contenga la fórmula ejecutiva;
- c) en el caso de la resolución pronunciada en rebeldía, una copia certificada de la citación conforme al original, o bien otro documento idóneo que probara que el demandado hubiere sido debidamente citado y, en el caso de incapacidad, un documento idóneo que comprobara que el incapaz hubiere sido debidamente representado, a menos que ello resulte del contenido de la sentencia;

ARTICULO 24

TRANSACCIONES JUDICIALES

Las transacciones concluidas ante autoridad judicial competente, según el artículo 22, párrafo 2, de la presente Convención, que tuvieran fuerza ejecutiva en una de las Partes, serán, a instancia del interesado, reconocidas y declaradas ejecutivas por la otra Parte.

La solicitud se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención.

ARTICULO 25

PROCEDIMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCION

1. En los procedimientos para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias, de las resoluciones y de las transacciones judiciales, la autoridad judicial de la Parte requerida aplicará su legislación.

2. La autoridad judicial que resolviese sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones se limitará a verificar si las condiciones previstas en la presente Convención hubieren sido cumplidas.

Esta autoridad judicial, al examinar las circunstancias sobre las cuales se fundara la competencia de la autoridad judicial de la otra Parte, estará vinculada por las contrataciones de hecho contenidas en las resoluciones que debieran ser reconocidas.

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 26

RATIFICACION Y ENTRADA EN VIGOR

La presente Convención será ratificada. Los instrumentos de ratificación serán intercambiados en Buenos Aires.

La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente al vencimiento del período de tres meses de la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación.

Cualquiera una de las Partes podrá denunciar la presente Convención a través de una notificación. La denuncia tendrá efecto el primer día del mes siguiente al vencimiento del período de seis meses de la fecha en la cual ha sido notificada la otra Parte.

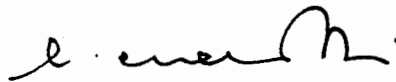
En la fecha de entrada en vigor de la presente Convención cesarán de tener efecto las normas relativas a la asistencia judicial en materia

civil y comercial de la Convención para la ejecución de las Cartas Rogatorias y de Sentencias entre la República Argentina y el Reino de Italia, firmada en Roma el 1 de agosto de 1887.

HECHO en Roma, a nueve días del mes de diciembre del año mil novecientos ochenta y siete en dos ejemplares originales, cada uno de ellos en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR LA REPUBLICA ARGENTINA

POR LA REPUBLICA ITALIANA



**CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO
ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA**

**La Repubblica Italiana
e la Repubblica Argentina**

desiderando intensificare la cooperazione tra i due Stati nel campo della assistenza giudiziaria in materia civile,

considerato che i due Stati sono entrambi parti delle Convenzioni dell'Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura civile, del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri e del 18 marzo 1970 sull'ottenimento di prove all'estero in materia civile o commerciale,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

ARTICOLO 2

AUTORITA'

1. Ai fini della presente Convenzione per autorità giudiziaria si intende ogni autorità delle Parti che sia competente secondo la legge nazionale nei procedimenti previsti dalla Convenzione stessa.
2. Ai fini della presente Convenzione autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Argentina il Ministero degli Affari Esteri e del Culto.

ARTICOLO 3

PROTEZIONE GIURIDICA

1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima Parte.

2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alle autorità giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale ultima Parte.

ARTICOLO 4

DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte non potrà essere imposta in ragione della loro qualità di stranieri, o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.

2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" è condannata con una sentenza passata in giudicato emessa dall'autorità giudiziaria di una delle Parti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte.

L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformità dell'articolo 23 della presente Convenzione.

L'autorità giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limiterà ad accertare se la sentenza sulle spese è diventata esecutiva.

ARTICOLO 5

GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI

1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di questa ultima Parte, del gratuito patrocinio per i procedimenti civili e per il contenzioso amministrativo.

2. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano parimenti sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonché delle altre facilitazioni previste in materia dalla legge di tale ultima Parte.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione delle sentenze.

4. Le facilitazioni previste ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono accordate sulla base di certificati rilasciati dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Qualora il richiedente non abbia la residenza nel territorio delle Parti tale certificazione sarà rilasciata dalle autorità competenti della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.

ARTICOLO 6

VALIDITA' DEGLI ATTI PUBBLICI

Per l'applicazione della presente Convenzione gli atti pubblici di ciascuna delle Parti hanno nell'altra Parte l'efficacia probatoria dei corrispondenti atti di tale ultima Parte.

ARTICOLO 7

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorità competente di ciascuna delle Parti e corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle autorità dell'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art.23, par. 1 della presente Convenzione.

ARTICOLO 8

INFORMAZIONI IN MATERIA LEGALE

Ciascuna Parte comunica all'altra Parte, su domanda redatta nella lingua della Parte richiesta, informazioni, non corredate da traduzione, riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, così come informazioni concernenti la giurisprudenza.

ARTICOLO 9

TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti di atti di stato civile così come altri atti sullo stato e la capacità delle persone necessari per una procedura giudiziaria se e per quanto la legge della Parte richiesta lo consenta.

ARTICOLO 10

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Le Parti inoltreranno le comunicazioni e la documentazione previste dalla presente Convenzione per il tramite delle autorità centrali, a meno che singole disposizioni della presente Convenzione non dispongano altrimenti.

ARTICOLO 11

PERSONE GIURIDICHE

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, quanto ad esse riferibili, anche alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione di una delle Parti.

ARTICOLO 12

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA, DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

L'assistenza giudiziaria nonché il riconoscimento e l'esecuzione degli atti, delle sentenze e dei provvedimenti previsti dalla presente Convenzione potranno essere negati se contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.

TITOLO II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 13

OBBLIGO DELL'ASSISTENZA

Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, particolare provvedendo alla trasmissione e alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti e dei testimoni, nonché all'acquisizione e alla trasmissione delle prove materiali.

ARTICOLO 14

COMMISSIONI ROGATORIE

La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare:

- a) l'autorità giudiziaria richiedente;
- b) l'autorità giudiziaria richiesta, ove possibile;
- c) il procedimento per il quale la commissione rogatoria è richiesta;
- d) l'identità, il luogo di residenza o di dimora, la cittadinanza, la professione delle parti e, eventualmente, dei loro rappresentanti;
- e) l'oggetto della commissione rogatoria, gli atti da espletare.

ARTICOLO 15

ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, si applicherà la legge della Parte richiesta. Peraltro qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta seguirà tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge.

2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta l'esecuzione della commissione rogatoria, tale ultima Parte, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, richiederà alla Parte richiedente tutti i dati e gli elementi complementari necessari.

3. La Parte richiesta farà conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se e per quanto non in contrasto con la legge della Parte richiesta.

4. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta restituirà gli atti alla Parte richiedente. La commissione rogatoria deve essere eseguita al più presto possibile. Qualora non sia stato possibile dare seguito alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituirà gli atti al più presto possibile indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

ARTICOLO 16

DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI

La prova della notificazione è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorità che ha notificato ovvero da un attestato di quest'ultima autorità certificante il modo,

il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione e dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito.

La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta e o l'attestato comprovanti la notificazione.

ARTICOLO 17

ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI.

Ciascuna Parte può a mezzo delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri Uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coattivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.

ARTICOLO 18

COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE.

1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire, in qualità di testimone o di perito, dinanzi alla propria autorità giudiziaria di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non può essere obbligata a comparire a seguito di detta citazione.

La parte richiesta procederà pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza tuttavia comminare ed eseguire le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.

2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennità previste dalla legge della Parte richiedente. La richiesta dovrà specificarne gli importi.

ARTICOLO 19

SPESE

Sono a carico della Parte richiesta le spese derivanti dall'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, ad eccezione delle indennità e delle altre spese relative alla esecuzione di perizie nonché di quelle derivanti dalla esecuzione di commissione rogatoria in particolari forme domandate dalla parte richiedente ai termini dell'art. 15, par. 1 della presente Convenzione.

ARTICOLO 20

LINGUE

1. Le domande di assistenza giudiziaria, ed i relativi allegati, sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati da una traduzione, effettuata da un traduttore ufficiale nella lingua della Parte richiesta.
2. I documenti relativi alla esecuzione della commissione rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E DI ALTRI PROVVEDIMENTI.

ARTICOLO 21

OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei limiti di cui agli articoli che seguono, le sentenze emesse in materia civile dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali.

ARTICOLO 22

CONDIZIONI RICHIESTE

1. Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorità giudiziarie di ciascuna Parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute dall'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art. 12 della presente Convenzione, alle seguenti condizioni:

- a) le sentenze siano state pronunciate da una autorità giudiziaria competente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;
- b) la parte soccombente sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove è stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, per quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata;
- c) la sentenza abbia acquisito l'efficacia di cosa giudicata e sia esecutiva secondo la legge della Parte ove è stata emessa;

d) fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata sentenza dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;

e) nessuna autorità giudiziaria della Parte richiesta sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda davanti alla autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a, l'autorità giudiziaria è considerata competente se:

a) alla data della presentazione della domanda il convenuto aveva la residenza o il domicilio sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attività, a carattere industriale, agricolo, commerciale o finanziario di un suo stabilimento, di una sua succursale o di una sua agenzia siti nel territorio di detta Parte;

c) per accordo espresso o tacito delle parti l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o avrebbe dovuto essere eseguita nel territorio di detta Parte;

d) in materia di responsabilità extra-contrattuale il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detta Parte;

e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di detta autorità giudiziaria sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo relativo alla determinazione dell'autorità competente, sempre che la legge della Parte richiesta non vi si opponga;

f) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;

g) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

h) la decisione ha ad oggetto lo stato o la capacità di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

i) la controversia ha ad oggetto una obbligazione alimentare e l'attore era residente o domiciliato nella Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.

3. Le decisioni provvisoriamente esecutive di ciascuna Parte, benché suscettibili di ricorso ordinario, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte alle condizioni previste dal presente articolo, in quanto ad esse applicabili, se decisioni dello stesso tipo possono essere ivi emesse o eseguite.

ARTICOLO 23

DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE

1. La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione può essere presentata direttamente dalla persona interessata alla autorità giudiziaria competente della Parte ove la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita.

In tale caso la documentazione menzionata al paragrafo 2 dovrà essere munita della 'apostille' prevista dall'art. 4 della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri conclusa all'Aja il 5 ottobre 1961.

Le Parti potranno tuttavia sopprimere tale formalità mediante intesa amministrativa.

2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione deve essere corredata da:

a) una copia della decisione certificata conforme all'originale;

b) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa, ovvero che essa è munita di formula esecutiva;

c) in caso di decisione pronunciata in contumacia una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto e, nel caso di incapacità, documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debilmente rappresentato, a meno che ciò non risulti dal contenuto della decisione.

d) una traduzione certificata conforme dei documenti di cui alle lettere a, b, c del presente paragrafo secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente Convenzione.

ARTICOLO 24

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Le transazioni concluse davanti alla autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 della presente Convenzione, ed aventi efficacia esecutiva in una delle due Parti, sono, su istanza di parte, riconosciuti e dichiarati esecutivi dall'altra Parte.

L'istanza sarà predisposta in conformità dell'articolo 23 della presente Convenzione.

ARTICOLO 25

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'autorità giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni si limita a verificare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte.

Tale autorità giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell'autorità giudiziaria dell'altra Parte è vincolata agli accertamenti di fatto contenuti nelle decisioni che devono essere riconosciute.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26

RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Ciascuna delle Parti potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data in cui è stata notificata all'altra Parte.

Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le norme relative alla assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale della Convenzione per l'esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmata a Roma il 1 agosto 1887.

Fatto a Roma il 9 dicembre 1984

in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Argentina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]